GT 51: La universidad en los 60. Política, investigación científica y educación

I. De la Universidad del Norte a la Universidad para el desarrollo (1968-1970). El futuro de la educación superior en Uruguay desde la perspectiva de las derechas.[1]

María Eugenia Jung

Archivo General de la Universidad de la República

Introducción

A fines de los 60, mientras Uruguay atravesaba una grave crisis económica, social y política, y en el marco de las discusiones entre el Poder Ejecutivo y la Universidad sobre el futuro de la educación superior, un grupo de personalidades e instituciones públicas y privadas impulsaron la creación en Salto de una universidad alternativa a la de Montevideo.2 Con esta finalidad, en setiembre de 1968 se creó el Movimiento Pro-Universidad del Norte que llevó a cabo una intensa movilización de proyecciones regionales y nacionales al punto que obtuvo un fuerte respaldo del gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco. En el polarizado ambiente uruguayo esta organización, en la que inicialmente habían confluido diversos sectores sociales, fue virando hacia las vertientes más radicales de la derecha política de la época produciendo una división en la comunidad salteña entre quienes apoyaban la descentralización bajo la órbita de la Universidad y aquellos que en cambio buscaban un camino alternativo que «*nada tiene que ver con esta ola subversiva, que nace de un sentimiento autonómico real*».[2] El Movimiento pro Universidad del Norte contó con la adhesión de las «fuerzas vivas» del departamento (Club de Leones de Salto, el Rotary Club, el Centro Comercial e Industrial), de corporaciones profesionales como el Centro Agronómico así como de dirigentes locales y representantes del gobierno departamental vinculados a los sectores conservadores de los partidos tradicionales. En el ámbito estudiantil, en un contexto de disputa al interior de las agremiaciones, miembros de la Asociación de Estudiantes del Liceo Osimani y Llerena crearon la Juventud Salteña de Pie, organización anticomunista que dedicó su esfuerzo militante a favor de la Universidad del Norte y que confluyó en la creación, en agosto de 1970 en Salto, de la Juventud Uruguaya de Pie.[3] A nivel nacional se plegaron a la iniciativa diversos actores políticos y órganos de prensa ligados a los grupos más conservadores. Para estos sectores, la fundación de una universidad pública en Salto constituyó una oportunidad para imponer un formato diferente en oposición al modelo político y académico-institucional de la Universidad de la República.

---

1 Este trabajo forma parte de mi tesis en el marco de la Maestría en Ciencias Humanas, Opción Historia Rioplatense de la FHCE/Udelar.

2 Declaraciones de la Dra. Alda Thevenet de Andreu. *Tribuna Salteña*, 3 de agosto1969, 5-7

3 *Tribuna Salteña*, 3 agosto de 1969, 5 y 7.

Con la creación del Movimiento la antigua demanda de extender la cobertura de la educación superior trasvasó lo local incorporándose a las discusiones político-ideológicas que marcaron la agenda de esos años a nivel nacional y, en especial, a las disputas por el control de la educación. Simultáneamente, se reactualizaron viejas discusiones sobre el papel de las universidades y los distintos «modelos» de educación superior. Desde la década de los cincuenta se produjo un auge de los debates de carácter global y latinoamericano sobre el papel específico de las universidades en los procesos de institucionalización de la ciencia y la tecnología como parte de las búsquedas de un camino al desarrollo nacional. La progresiva polarización ideológica de la Guerra Fría marcó su impronta en estos debates que pasaron a centrarse en el rol de la Universidad en los procesos de cambio revolucionario. En particular, en esos años el «desarrollismo» y las teorías de la modernización ejercieron una fuerte influencia sobre estos asuntos que concitaron gran atención en América Latina y en el país. Los acontecimientos internacionales de comienzos de la década del sesenta vigorizaron la atracción «por las cuestiones del desarrollo»; entre ellas la Revolución cubana, y su pronta incorporación al campo socialista así como el programa de ayuda norteamericano impulsado por el presidente J.F. Kennedy conocido como «Alianza para el progreso» cuyo objetivo era estimular un plan de reformas económicas y sociales orientadas a superar el subdesarrollo y la miseria social para evitar una expansión revolucionaria a la cubana[4]. En ese marco, como señalan María Caldelari y Patricia Funes, «la tríada educación-técnica-ciencia» se convirtió en «un indicador del desarrollo alcanzado y de la distancia que nos separaba de los países del primer Mundo». En este sentido se concretó en la región un importante movimiento de «actualización científica» y renovación académica[5]. En Uruguay, por ese entonces los actores universitarios también se encontraban discutiendo sobre la necesidad de avanzar en una reestructura académica que posibilitara la construcción de una «Universidad Nueva» cuya máxima expresión fue el plan de reforma de la Universidad formulado en 1967 por el rector Óscar Maggiolo y que constituyó el primer proyecto sistematizado de reconversión integral de la institución[6]. El Estado no permaneció al margen de estas discusiones y desde principios de la década, interesado en acceder a las ayudas externas prometidas a través de la Alianza para el Progreso, manifestó una creciente preocupación por reestructurar el sistema educativo

---

4 Carlos Altamirano. «Desarrollo y Desarrollistas» *Prismas*, *Revista de historia intelectual*, 2, (1998) 79.

5 Ver Caldelari, María y Funes, Patricia.- «La Universidad de Buenos Aires, 1955-1966: lecturas de un recuerdo». En Oteiza, Enrique (coord.), *Cultura y Política en los años 60*. (Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC, 1997) 20. Vessuri, Hebe. *O inventamos o erramos». El Poder de la ciencia como idea-fuerza en América Latina,* (Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2007), 210 y «Universidad e investigación científica después de las Reformas». En *Educación Superior y Sociedad*. v.9, 1 (1998) 77-100

6 Este impulso renovador se propuso superar la tradicional orientación profesionalista que había definido a la institución hasta el momento y, en cambio, puso énfasis en el fomento a la investigación científica asociada a la docencia y en reforzar su inserción en la sociedad. El «Plan Maggiolo», como se lo conoce, apuntaba a dos objetivos básicos: el cambio de la estructura universitaria y el impulso a la investigación científica *Plan de Reestructuración de la Universidad de Oscar Maggiolo*. (Montevideo. Universidad de la República, 1986), Vania Markarian, María Eugenia Jung, Isabel Wschebor. *1968: la insurgencia estudiantil.* (Montevideo, Universidad de la República, 2008) y Vania Markarian. «Apogeo y crisis del reformismo universitario. Algunos debates en torno al «plan Maggiolo» en la Udelar». *Pensamiento Universitario*, 14 (octubre de 2011)

uruguayo al tiempo que emprendía acciones en áreas que hasta el momento habían estado reservadas a la Universidad de la República, entrando en colisión con sus autoridades.[7]

Por otra parte, tal como ha señalado Andrés Bernasconi, las décadas de los sesenta y setenta significaron el punto más alto en la influencia de lo que se ha denominado «modelo de universidad latinoamericana» a la vez que el comienzo de su declive.[8] Las universidades públicas en esos años fueron objeto de críticas cada vez más extendidas por su lentitud para satisfacer las demandas de sociedades «en plena modernización» donde sectores más vastos de las clases medias urbanas presionaban para acceder a la educación superior[9]. En la mayoría de los países latinoamericanos se produjo un proceso de diversificación con la creación de otros centros enseñanza superior públicos y/o privados y de institutos no universitarios de carácter terciario. El avance del sector privado obedeció, además, a una reacción contra los que se consideraban los principales males de las universidades públicas: politización, deterioro de los niveles de calidad académica, pérdida de incidencia y una caótica masificación.[10] En otro orden, la creciente politización y el predominio de las ideologías de izquierda, acentuadas luego de la revolución Cubana, determinó que las universidades abandonaran su tradicional rol de formadoras de los cuadros dirigentes y fueran concebidos como agentes protagónicos en la transformación de la sociedad. Esta circunstancia derivó en un cambio en las relaciones entre las universidades nacionales, que perdieron apoyo de los elencos dirigentes, y los gobiernos[11].

El presente trabajo analiza las vinculaciones entre las «derechas» y la Universidad así cómo las ideas que éstos sectores promovieron o apoyaron relativas al rol de las instituciones de educación superior, en sus diversas variantes, para el desarrollo nacional. En el contexto de la

---

7 Así lo evidencian las discusiones acerca de la propuesta realizada en 1954, a pedido del gobierno uruguayo, por la Fundación Armour del Instituto de Tecnología de Illinois de crear un centro de «investigación y desarrollo industrial», el proyecto para establecer un Centro Nacional de Investigaciones a fines de los cincuenta que finalmente no prosperó y la creación en 1961 del Consejo Nacional de Investigaciones. Ver María Eugenia Jung *La Udelar y la creación del CONICYT: Debates y conflictos (1961-1964).* Ponencia presentada al Seminario «Ciencia, educación y desarrollo», organizado por el Archivo General de la Universidad y el Departamento de Ciencias de la Educación/FHCE, 5 de julio de 2012. Vania Markarian (ed.). *Don Julio: Documentos del Archivo Ricaldoni*. (Montevideo: Archivo General de la Universidad de la República, 2007)

8 Esta expresión es utilizada para referirse a la configuración institucional resultante de la aplicación del modelo francés o napoleónico, profesionalizante y organizado por facultades, adaptado en la región desde fines del siglo XIX, y de la influencia ejercida por el movimiento reformista de Córdoba, que bregó por la implantación de la representación tripartita en la conducción universitaria, la consolidación de la autonomía académica, financiera y administrativa de las universidades y una nueva concepción de la función de extensión universitaria, entre otros aspectos.

9 José Joaquín Brunner, *Educación Superior en América Latina. Cambios y desafíos.* (Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 1990) 20

10 Bernasconi, Andrés.- «Is there a Latin American Model of the University?», *Comparative Education Review*, v.52, 1.(2007) 28 Hasta comienzos de los años cincuenta en la región existían cerca de setenta universidades, que en su mayoría eran públicas y se localizaban en los centros metropolitanos. En Argentina, durante los primeros años de los sesenta se multiplicó el número de universidades como consecuencia del decreto que eliminaba las restricciones para su creación. En esos mismos años se verificó un «proceso acelerado de creación de universidades provinciales» que fueron nacionalizadas paulatinamente desde la década de los 70. Ver P. Buchbinder «Los sistemas universitarios de Argentina y Brasil», 15 y Pedro Krostch, «Argentina» en Carmen García Guadilla. *Pensadores y forjadores de la universidad latinoamericana* 131-132

11 A. Bernasconi «Is there a Latin American Model of the University?»

crisis del sistema educativo uruguayo, los planteos de las figuras más representativas del Movimiento pro Universidad del Norte, generalmente diluidos en la confrontación política del período, permiten una aproximación a otras visiones acerca de las características y funciones de las universidades, que se manifestaron, en algunos casos, en la ponderación de la formación de técnicos para el desarrollo nacional. En el ambiente general de confrontación que vivía el país, las distintas posiciones acerca de la configuración de la educación superior y de sus funciones fueron planteadas por los diferentes actores, de izquierda o de derecha, en términos dicotómicos.

I. La crisis de la educación superior: diagnósticos y propuestas

En la primera mitad de 1960 el sistema educativo nacional comenzó a evidenciar los impactos de la aguda crisis económica, social y política que se venía incubando desde mediados de la década anterior. En particular, la educación superior evidenció un incremento exponencial de la matrícula y la incapacidad del sistema para cubrir la creciente demanda, la excesiva duración de las carreras, los altos niveles de deserción y el bajo nivel de egresos así como la preferencia de los estudiantes por las carreras de Derecho y Medicina (que concentraban el 89% del alumnado) mientras un grupo minoritario se dedicaba a las ciencias agrarias, a las exactas y naturales o a la investigación pura. En términos generales, los fenómenos señalados reproducían lo observado en otras realidades de la región respondiendo así a una tendencia global y regional[12]. Según datos de los historiadores Blanca Paris y Juan Oddone, el estudiantado uruguayo aumentó de 4800 estudiantes en 1939 a 17.108 en 1957[13]. Aunque los autores cuestionan estas cifras, las mismas dan una idea del crecimiento experimentado. Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes; entre 1961 y 1968 el incremento fue de un 22% y los ingresos aumentaron un 54% de 1955 a 1966[14]. En 1972 la Universidad de la República había alcanzado los 28.453 alumnos.[15] La masificación estudiantil trajo aparejadas las insuficiencias locativas y del personal docente así como la carencia de recursos para atender la demanda. A esta problemática se sumaba la drástica contracción del gasto de educación en el presupuesto general del Estado provocando un resentimiento de las actividades del sistema educativo en todos sus niveles y el incremento de las movilizaciones en reclamo de mayores recursos.[16]

El sistema universitario se percibía deficitario frente a los requerimientos de la modernización económica y social. Esta situación fue advertida tempranamente por el núcleo

[12] En Argentina, por ejemplo, a partir de la segunda posguerra comenzó el proceso de masificación en las universidades donde el número de estudiantes pasó de 47.400 en 1945 a casi 160.000 en 1960 mientras que de 1960 a 1972 aumentó a 333.000. También en lo relativo a la distribución del estudiantado se observa la misma pauta. Ver Buchbinder, Pablo. *Historia de las Universidades argentinas* (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005)

[13] Datos extraídos de J.A. Oddone y Blanca Paris. *La Universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis, 1885-1958* (Montevideo: Universidad de la República, 1971), I, 254.

[14] Porcentajes calculados en base a cifras contenidas en 'Plan Maggiolo'. Ver Vania Markarian «Apogeo y crisis del reformismo universitario» 92-3

[15] Los datos correspondientes a 1972 son aportados por Benjamín Nahum, Ana Frega, Mónica Maronna, Ivette Trochón- *El fin del Uruguay liberal 1959-1973* (Montevideo : EBO, 1993), 174

[16] B. Nahum, y otros *El fin del Uruguay liberal.* 174

reformista de la Udelar[17] y constatada unos años más tarde, por los estudios realizados por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE); organismo técnico creado durante el primer gobierno del Partido Nacional en enero de 1960[18] con el cometido de *«formular planes orgánicos de desarrollo económico»* y que recibió un renovado impulso gubernamental luego del lanzamiento de la Alianza para el Progreso en 1961.[19] La CIDE, integrada por prestigiosos universitarios provenientes de las ciencias sociales, elaboró el primer diagnóstico sistemático acerca de la situación económica nacional, aportando conocimiento nuevo sobre el que se asentó el primer Plan Nacional de Desarrollo.[20].

En particular, el *Informe sobre el Estado de la Educación*[21], cuya aparición pública se produjo en 1965 y 1966, proporcionó información sistematizada acerca del sistema educativo actualizando «la agenda de discusión a las nuevas temáticas que requería la vinculación de la educación con la estrategia nacional de desarrollo»[22]. Participaron en su elaboración una nueva generación de sociólogos que adhería a la sociología del desarrollo, destacándose entre ellos la figura de Aldo Solari.[23] Desde esa perspectiva, la educación fue concebida fundamentalmente por su contribución al desarrollo económico y social y por tanto como «una inversión en hombres, o si se prefiere, como un capital social básico»[24]. El estudio sobre la situación de la enseñanza elaborado por la CIDE identificó «nuevos problemas, formas de abordaje y alternativas para solucionarlos» y puso énfasis en la necesidad de encarar un proceso de reforma educativa[25].

Concretamente en el ámbito de la educación superior, planteó severas críticas a la Universidad de la República así como la necesidad de modernizar su estructura para adaptarla

---

17 Nos referimos al grupo de actores universitarios que desde mediados de los cincuenta buscaban renovar la institución universitaria para adecuarla a los requerimientos de la nueva realidad local y mundial mediante el fomento a la investigación, una mayor inserción social y fortaleciendo su compromiso con el medio. Muchos de ellos, como Óscar J. Maggiolo, provenían de filas batllistas y en el contexto de radicalización de la época fueron virando hacia posiciones de izquierda.

18 *Registro Nacional de Leyes y Decretos*, 27 de enero de 1960, I, p.146-8

19 Rosa Alonso Eloy, Carlos Demasi *Uruguay 1958-1968. Crisis y Estancamiento* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1986), p. 102-6

20 Garcé, Adolfo. *Ideas y competencia política en Uruguay (1960-1973). Revisando el «fracaso» de la CIDE*. Montevideo, Trilce, 2005. 84-5.

21 Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Comisión Coordinadora de los Entes de la Enseñanza. *Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay. Plan de Desarrollo Educativo* (Montevideo, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, 1966)

22 D»Avenia, Lucas. *La CIDE y el campo pedagógico uruguayo: actores, producción de conocimiento y agenda política.* Ponencia presentada al Seminario «Ciencia, educación y desarrollo en el Uruguay de los sesenta» organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación/FHCE y el Archivo General de la Universidad, 5 de julio de 2012. D»Avenia Lucas. *La irrupción de la cuestión del desarrollo en el campo educativo y su interpelación al campo pedagógico. El caso de la CIDE en Uruguay* ponencia presentada a las IV Jornadas de Investigación y III de Extensión del Facultad de Humanidades y Ciencias, noviembre de 2011.

23 Errandonea, Alfredo. «Historia Institucional de la Sociología» En *Revista de Ciencias Sociales*. Departamento de Sociología. 21 (Agosto 2003) 25-26 Al promediar la década de los cincuenta, en forma coincidente con el inicio de la prolongada crisis nacional y con la «búsqueda de un nuevo modelo», comenzó la institucionalización de la sociología científica en Uruguay. La nueva generación de sociólogos, encabezados por Isaac Ganón y Aldo Solari, contribuyó a difundir la sociología del desarrollo. El ámbito principal de investigación fue el Instituto de Ciencias Sociales, creado a partir de la cátedra de Sociología de la Facultad de Derecho y Ciencias en 1958.

24 citado por *Gaceta Universitaria,* 36 (abril 1966)

25 D'Avenia, Lucas. *La irrupción de la cuestión del desarrollo en el campo educativo*, 4

a los cambios del país y del mundo. Los señalamientos más importantes referían al bajo rendimiento y eficiencia del sistema debido a los factores arriba señalados: excesiva duración de las carreras, desequilibrada distribución de estudiantes por área, alto nivel de deserción estudiantil y baja representación de sectores pobres a pesar de la gratuidad[26]. El informe ponía en evidencia que «la educación no parecía ser el instrumento de movilidad que muchos habían imaginado»[27] Proponía a continuación una serie de medidas para su solución como la selección del alumnado de enseñanza media para racionalizar el ingreso a la Universidad, el establecimiento de normas para regularizar los estudios universitarios, la implementación de una política de becas para alumnos con menores recursos así como de becas universitarias orientadas a las facultades científicas y tecnológicas y la creación de una Facultad de Educación[28].

Pese a los cuestionamientos que recibió, particularmente de parte de medios universitarios, el análisis de la Comisión junto a la idea de la crisis educativa y la necesidad de una reforma del sistema, caló hondo en los distintos ámbitos y sectores políticos.. En este contexto, se abrió el camino a otros planteos que propugnaban modelos alternativos al de la Universidad de la República[29].

A inicios de la década del sesenta surgieron las primeras propuestas, asociadas a la derecha política, de crear una universidad privada. En el fragor de la confrontación política que dominó esos años, fueron visualizadas como contrapuestas al modelo reformista que algunos actores universitarios promovían al interior de la Udelar. De hecho surgían en el marco de la agudización de la crisis económica, social y política en el país y del franco deterioro de las relaciones entre la Universidad de la República y el poder político. Desde la aprobación de Ley orgánica de la Universidad, que consagraba la autonomía y el cogobierno pleno, diversos actores políticos y sociales acusaron a los actores universitarios, particularmente, al cuerpo docente y a los gremios estudiantiles, de adherir a ideologías de izquierda. Las intensas movilizaciones por el presupuesto universitario en octubre de 1960 intensificaron las tensiones entre el gobierno central y la Universidad que se profundizaron en los años siguientes[30]. El impacto de la Revolución cubana sobre las izquierdas y medios universitarios agudizó estos enfrentamientos. La institución universitaria fue percibida desde entonces como un centro de perturbación social constituyéndose en un blanco para los ataques de los sectores conservadores. Paralelamente, surgieron a la escena pública organizaciones estudiantiles derechistas como el Movimiento por la Defensa de la Libertad (MEDL), que tuvieron

---

26 *Informe sobre el estado de la Educación en Uruguay* (1965). Un desarrollo más afinado de la situación universitaria puede consultarse en Aldo Solari, «La universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay». *Aportes*, no. 2, (1966), 4-51.

27 Citado por B. Nahum. *El fin del Uruguay liberal*, 178

28 Para un resumen de las propuestas incluidas en el plan de educación de la CIDE ver *Gaceta Universitaria,* 36 (abril 1966)

29 El estudio fue recibido con recelo por parte de los diferentes actores universitarios, ya que en palabras de Óscar J. Maggiolo, presentaba «grandes virtudes» a la vez que «grandes defectos»

30 Vania Markarian, M.E. Jung, I. Wschebor. *1958: El cogobierno autonómico*, (Montevideo, Universidad de la República, 2008) 142

actuación en el ámbito universitario y contribuyeron a la escalada de violencia que caracterizó a los tempranos sesenta.[31]

Por esos años, los sectores conservadores del Partido Nacional plantearon la creación de una «universidad libre» (privada y católica), eliminando el monopolio de la educación superior por parte de la Udelar. La utilización del término *libre* seguramente remitía a la reciente experiencia argentina en relación con los debates sobre la *laica y la libre* que tanto impacto tuvieron en la vecina orilla. En 1958 el gobierno de Arturo Frondizi reglamentó el artículo 28 del decreto 6.403, que abrió la puerta a la creación de universidades privadas con capacidad de expedir diplomas y títulos habilitantes[32]. Esta disposición provocó fuertes enfrentamientos entre los opositores reformistas al decreto, muy especialmente el movimiento estudiantil, y sus partidarios católicos que fueron conocidos popularmente por el lema «laica o libre»[33].

La propuesta iba a tono con una tendencia regional y mundial de diversificación de las instituciones de educación superior para hacer frente a los desafíos que planteaba la expansión de la matrícula, el deterioro de la calidad académica y la politización de las universidades nacionales; problemas que aquejaban también a la casa mayor de estudios. Los impulsores de la «universidad libre» destacaron los beneficios académicos que traería aparejada la «emulación que acompaña siempre a la competencia» al mismo tiempo que hacían énfasis en la situación de la Universidad de la República, filtrada por «tendencias extrañas a la enseñanza misma y reñidas con el espíritu de las instituciones». Como corolario de estos debates, en abril de 1961 el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Eduardo Víctor Haedo, presentó ante ese organismo un proyecto de *Ley de Enseñanza Libre*, que contemplaba la posibilidad de que

---

[31] El grupo surgió como derivación del Movimiento Nacional por la Defensa de la Libertad que tenía vínculos con los sectores conservadores del Ateneo de Montevideo. Su principal objetivo era combatir a los grupos de izquierda que actuaban en ámbitos estudiantiles. Ver Mark J. Van Aken, *Los Militantes. Una historia del movimiento estudiantil uruguayo desde sus orígenes hasta 1966* (Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, 1990). Ver además Magdalena Broquetas, «Los atentados de julio de 1962. Una aproximación a la violencia política en el Uruguay de los tempranos sesenta desde la perspectiva del ideario conservador, Terceras Jornadas de Historia Política (FCS/UDELAR) (Montevideo, Junio 2011) y «A propósito de las repercusiones del «caso Eichmann». Antisemitismo y anticomunismo en Uruguay (1960-1962)», *Encuentros Uruguayos*, Año 3, no. 3 (setiembre 2010); Gabriel Bucheli, «Los inicios. Rastreando los orígenes de la violencia política en el Uruguay de los 60», *Cuadernos de la Historia reciente 1968-1985*, No. 4 (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2008); Mauricio Bruno, «Algunas operaciones de las «bandas fascistas», y su conexión política», *Cuadernos de Historia Reciente 1968-1985*, No. 5 (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2008) y *La caza del fantasma. Benito Nardone y el anticomunismo en Uruguay* (Montevideo: FHCE-Departamento de Publicaciones, 2007).

[32] Con la reglamentación de esta ley, entre 1958 y 1970, se crearon 19 universidades privadas. Datos tomados de Rovelli, Laura. «Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada». *Temas y Debates*. Año 13, no. 17. Agosto de 2009 Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. 117-137

[33] Buchbinder, Pablo. *Historia de las universidades argentinas*, 173-79. Califa, Juan Sebastián. «El movimiento estudiantil reformista frente al primer episodio de la «laica o libre» (mayo de 1956)» En *Sociohistórica* (26), 51-79. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4509/pr.4509.pdf. En el marco de los enfrentamientos estudiantiles callejeros, irrumpió por primera vez el Movimiento Nacionalista Tacuara en la escena pública argentina. Al respecto ver: Galván, María Valeria. «Discursos de los organismos de inteligencia argentinos sobre el Movimiento Nacionalista Tacuara en el marco de la primera Guerra Fria». En *Antíteses,* v.2, no.4, jul-dez 2009

el nuevo instituto fuera localizado en el interior. Aparicio Méndez[34], catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y artífice del proyecto, sostenía que la creación de universidades privadas «en países como el nuestro, nuevo, con una juventud numerosísima y creciente, que desborda las posibilidades de la enseñanza oficial, debe encararse como una verdadera necesidad de la cultura»[35]. El consejero Haedo, por su parte, afirmaba que el proyecto contribuía a disminuir el éxodo de jóvenes del interior hacia Montevideo al tiempo que descongestionaba a la Universidad de la República que de otro modo corría el riesgo de convertirse en «una receptora de exámenes»[36]. En suma, los centros privados aliviarían la sobrecarga de la Universidad estatal y posibilitarían una distribución más equitativa de las posibilidades de acceso a la educación y a la cultura entre el Interior y la capital del país.

El proyecto Haedo, como se lo conoció, despertó el inmediato rechazo de parte de la dirigencia universitaria, de la mayoría de sus representantes docentes y en particular de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay[37] y fue asociado a la «campaña sistemática de desprestigio de la Universidad» orquestada desde el poder político. Finalmente la iniciativa no prosperó. La instalación de un sistema privado de enseñanza superior chocaba con valores arraigados en la tradición educativa uruguaya: la laicidad y la gratuidad y, por tanto, no contó con el apoyo del sistema político mayoritariamente apegado a esa tradición.[38] El proyecto descentralizador de fines de la década y, en particular, el devenir del Movimiento pro-Universidad del Norte, reconocen un antecedente en estas propuestas.

Mientras tanto, en el correr de la década, diversos actores locales reanudaron sus reclamos de instalar un centro de educación superior pública en el norte del país. A lo largo de la década habían circulado diversas propuestas con esa finalidad. Entre ellas se destacan: en Tacuarembó en 1963 un proyecto de ley del diputado herrerista Prof. José Pedro Lamek que dispuso instalar una universidad en la capital del Departamento, en 1964 el diputado sanducero José Cerchiaro San Juan propuso a la Cámara de Diputados la creación de la Universidad del Litoral, en 1966 el diputado de Salto Martín Boada Pettiati presentó el proyecto de ley de Creación de la Universidad del Norte en Salto[39] y en 1968 el diputado colorado Jaime Montaner presentó un nuevo proyecto para crear un centro de educación superior con sede en Tacuarembó. Los proyectos exponían sendas fundamentaciones validadas en los diagnósticos

[34] Abogado especialista en derecho administrativo, fue docente de dicha materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre 1934 y 1955. Adquirió gran prestigio, incluso internacional, como jurista. Militó en el Partido Nacional, fue integrante de la Corte Electoral en los años 1940 y Ministro de Salud Pública durante el primer y segundo colegiado blanco entre 1961 y 1964. En 1971 se acercó al Movimiento Por la Patria; tras la celebración de las elecciones de noviembre de ese año, Méndez presentó un alegato de impugnación de los comicios por supuesto fraude. Integró el Consejo de Estado luego del golpe de Estado del 27 de junio 1973 y fue presidente de facto entre 1976-1981

[35] *La Mañana,* 2 de enero de 1961, En Archivo General de la Universidad. *Archivo Laguardia* CAJA 6, Carpeta 6.8

[36] *Actas del Consejo Nacional de Gobierno*, 4 de abril de 1961. Archivo General de la Nación

[37] Ver discusiones en *Asamblea General del Claustro,* 10 de mayo de 1961, y 1o de junio de 1961 Universidad privada

[38] Ver Alonso Eloy, Rosa, Demasi Carlos. *Uruguay 1958-1968*. 18-19

[39] *Diario de sesiones de la Cámara de Representantes*, 4 de diciembre de 1963, 91, 2 de julio de 1964, no. 992, tomo 565, 377-8 y 17 de agosto de 1966, 194-200.

y los datos brindados por los informes de la CIDE, pero no ahondaban en la problemática específica de la Universidad de la República a la que el informe de educación aludía. Las propuestas tenían en común el interés de potenciar aquellas disciplinas vinculadas al agro, como agronomía y veterinaria, con el objetivo de crear los recursos humanos necesarios para el desarrollo productivo de esas regiones. Por otra parte, el sostenido interés local por buscar salidas educativas a nivel superior intentaba atender la demanda creciente producida por la expansión de la enseñanza secundaria, particularmente en las capitales departamentales, que se expresó en la creación de nuevos liceos[40]. Se planteaba instalar instituciones de carácter público que funcionaran como entes autónomos del Estado. Ambas universidades (la que se creara y la Universidad de la República), se regirían por las mismas disposiciones legales, en este caso la Ley Orgánica que había sido aprobada en 1958. Estas iniciativas, sin embargo, no tuvieron eco parlamentario, pero dejaron en evidencia la persistencia de los reclamos descentralizadores así como las limitaciones de los sectores dirigentes locales para materializar sus demandas sin contar con el apoyo del gobierno central. La creación de nuevas universidades no formó parte de la agenda de discusión pública ni fue visualizada como un mecanismo para resolver los problemas que aquejaban a la educación superior, como lo demuestra el informe sobre el sector elaborado por la CIDE. Tampoco los partidos políticos funcionaron como mediadores de los intereses de aquellos grupos regionales y locales que intentaban instalar esa demanda en la esfera estatal.

II. La «Universidad del Norte» o una «Universidad para el desarrollo» (1968-1970)

La creación del Movimiento pro-Universidad del Norte en setiembre de 1968 reavivó los reclamos de descentralización universitaria al mismo tiempo que puso en cuestión el monopolio de la educación superior por parte de la Udelar. En este contexto, el discurso de sus promotores (como el de sus detractores) estuvo teñido de un fuerte contenido político e ideológico. Aún cuando resulta difícil disociar los fundamentos ideológicos de los aspectos más técnicos o académicos, las argumentaciones vertidas daban cuenta del rol que en esos años sectores de la derecha política asignaron a la universidad y a los técnicos para el desarrollo nacional así como de las vinculaciones entre las ideas desarrollistas de circulación regional y global (en su versión de derecha) y cómo era concebido este nuevo centro de educación, su organización y sus fines. Desde una perspectiva que vinculaba estrechamente educación y economía, y apropiándose de las conclusiones extraídas por la CIDE sobre el sector, se impulsaron modificaciones en la enseñanza superior con el propósito de ajustarla a las necesidades económicas del país, las posibilidades ocupacionales y sus efectos sobre la productividad. La posible fundación de una universidad en el norte del país replanteaba, además, las discusiones acerca de los distintos «modelos» de educación superior de importante difusión en el contexto regional y mundial: la preparación para las profesionales liberales, la transformación en centros dedicados a la investigación científica y tecnológica o la creación de instituciones de carácter técnico que implementara carreras cortas en relación con las necesidades regionales y locales así como otras variantes manejadas en la época.

[40] Entre 1960 y 1969 el número de estudiantes liceales (de 1er hasta 4º año) pasó de 1894 a 3004. Datos extraídos de *Los Departamentos Salto*, (Montevideo, Editorial Nuestra Tierra, 1970) 53

Por esos años en América Latina (y en el mundo) se asistía a un proceso diferenciación al interior del sistema de educación superior que consolidó «un numeroso y heterogéneo conjunto de establecimientos que reciben el nombre de universidades» al que se sumaba un cada vez más extendido sector de educación superior no universitaria[41]. Acorde con esas tendencias, en Uruguay, mientras los sectores reformistas de la Universidad promovían una orientación que privilegiara la investigación científica y tecnológica como vía para el desarrollo cuyo corolario fue el «Plan Maggiolo», los partidarios de la Universidad del Norte parecieron inclinarse por la creación de carreras cortas de carácter técnico y aplicado, que brindaran rápida salida laboral, alternando entre la opción de crear una Universidad Tecnológica o institutos superiores no universitarios ubicados en el interior. En el ambiente general de radicalización que vivía el país, estas distintas visiones ponían de manifiesto no sólo la existencia de tendencias académicas discordantes, sino también la confrontación de ideologías políticas opuestas.

Cabe señalar que originalmente el Movimiento pro-Universidad del Norte no cuestionó el modelo profesionalizante que se impartía en Montevideo y que por otra parte era el único que existía. Según sus partidarios la universidad en el interior concretaría la ansiada descentralización cultural resolviendo los desequilibrios de acceso a la educación superior entre Montevideo y el Interior al mismo tiempo que atenuaría el éxodo hacia el sur en un contexto en el cual la Universidad central aparecía como un centro de disturbios. Se reactivó entonces el proyecto de ley presentado en 1966 por el diputado Martín Boada Pettiati que preveía la instalación de la Universidad del Litoral y Norte de la República con sede en Salto. El mismo establecía que la nueva institución se integraría con tres facultades, Derecho y Ciencias Sociales, Agronomía y Veterinaria junto a otras Facultades, Institutos y Servicios que eventualmente se crearan y su habilitación para expedir títulos equivalentes a los de la Udelar[42]. Estos planteos iniciales fueron tomando diferentes modulaciones y modificando sus contenidos una vez que el movimiento amplió sus bases de apoyo.

En la medida que el asunto concitó apoyos más amplios y traspasó el ámbito local, creación de una universidad en el interior empezó a ser visualizada como parte de una reforma educativa más amplia encaminada a superar las graves insuficiencias que presentaba la enseñanza universitaria en el país. Se pensaba en la creación de una nueva universidad, independiente de la casa mayor de estudios, libre de sus problemas, de orientación renovadora y que se insertara adecuadamente en la solución de los problemas fundamentales del país a la vez que incidiera problemática cultural, científica y tecnológica de las diferentes zonas.

El diario nacionalista *El País* calificaba a la Universidad del Norte como una

> experiencia pedagógica de sentido renovador y profundo y vasto alcance [que] debe edificarse repensándola con el estudiante en una comunidad en desarrollo progresivo —concebirla sólo para un presente ya es atraso— y acomodando las instituciones y las formas administrativas a esa meta.[43]

---

41 José Joaquín Brunner. *Educación Superior en América Latina*, 20

42 Ver proyecto de ley en *Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes,* 17 de agosto de 1966, p. 194-200

43 *El Paí*s, 27 de octubre de 1969,p.3 «Reforma de la enseñanza»

Los adherentes al proyecto reclamaban además una mayor intervención del Estado en los asuntos de la enseñanza; ya que el Poder Ejecutivo así como los legisladores una vez elegidos «por el pueblo» «lo representan y deben opinar»[44]. Asimismo, la localización de este centro fuera de Montevideo contemplaba las necesidades educativas del país a la vez que atendía al «interior» siempre olvidado. Así mientras la Universidad de la República se ajustaba a las necesidades exclusivas «de desarrollo de un pedazo de tierra uruguaya»; el de la capital, la del Norte apostaba a «superiores destinos» al promover el «avance tecnológico y de producción y de pensamiento» nacional[45]. Con estos planteos iba tomando cuerpo la idea de crear un instituto de orientación tecnológica para impulsar el crecimiento regional.

Desde 1969, y como resultado de la intensa campaña que llevaba adelante el Movimiento, el proyecto obtuvo el apoyo del poder Ejecutivo trascendiendo así los estrechos marcos locales que le dieron origen para adquirir resonancias nacionales. La influencia del Ministro de Cultura Federico García Capurro, quien le dio un fuerte impulso en el ámbito gubernamental, fue decisiva en su derrotero posterior. El ministro se transformó en una figura clave en la articulación de diversos intereses y en la promoción de acciones para su concreción[46]. Sus opiniones alimentaron los debates en torno al futuro de la nueva institución, que fueron particularmente fecundos durante el período en que permaneció en su cargo. Por otra parte, el rol que asumió estuvo reforzado por su particular encono hacia la Universidad de la República que se manifestó, entre otros hechos, en su oposición sistemática a dialogar con sus autoridades. Los conflictos de García Capurro con esta institución remontaban a su época de estudiante cuando fue denunciado por irregularidades en la forma de acceso a cargos docentes a las que se sumaron más tarde serias acusaciones a su desempeño como Ministro de Salud Pública (irregularidades en la provisión de los cargos, designaciones directas). En 1954 la delegación estudiantil en el Consejo de Medicina lo había inculpaba de falta de idoneidad moral para ocupar el Cargo de Titular de la Cátedra de Radiología y ese mismo año recibió una censura de parte del Comité Arbitral del Sindicato Médico del Uruguay. En 1968, la Federación de Docentes Universitarios lo acusaba, entre otras cosas, de cercenar la autonomía universitaria, promover el desprestigio público de la Universidad y sus autoridades, apoyar al allanamiento policial a los locales universitarios así como promover la destitución del Consejo Directivo Central[47].

Los acontecimientos posteriores alimentaron las expectativas de que pronto la Universidad del Norte se convertiría en una realidad. La señal más fuerte en este sentido provino del Presidente Jorge Pacheco Areco que, en octubre de 1969, decretó la creación de la Junta Planificadora de la Universidad del Norte. Este organismo, que estaría compuesto por un representante de cada uno de los departamentos situados al norte del Río Negro, un miembro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y un representante del Ministerio de Cultura,

---

44 *BP Color* Edición extraordinaria 90 aniversario, 27 de noviembre de 1968, 18-19

45 *La Mañana, edición del Interior*, 11 de diciembre de 1969, 5

46 Federico García Capurro (1907 - 2000), médico radiólogo e integrante del Partido Colorado. Fue Ministro de Salud Pública en el periodo 1952-1954. Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco fue designado Ministro de Cultura luego de la renuncia de Alba Roballo, cargo que ocupó hasta marzo de 1970. Luego del Golpe de Estado de junio de 1973 integró el Consejo de Estado.

47 Ver *Asamblea General de la Claustro,* 22 de enero de 1968, 15-18

tenía entre sus cometidos realizar un estudio y relevamiento de las necesidades de educación superior en la región, elaborar la ley de creación de la Universidad del Norte, redactar y aprobar su estatuto orgánico y proponer al Poder Ejecutivo la contratación de un Rector provisorio.[48] La denominación del nuevo organismo así como los cometidos que le fueron asignados daban cuenta de la influencia que por esa época había adquirido la herramienta de la planificación. El decreto parecía introducir cierta racionalidad técnica mediante la producción de conocimiento sobre las poblaciones y sus recursos que avalara la creación de la nueva universidad. Sin embargo, resulta llamativo que en su integración no se incluyó a expertos en educación. En ese sentido, el decreto no dejaba claro cómo iba a proceder al estudio y diagnóstico de la realidad de las zonas geográficas que abarcaba.

No obstante, del texto del decreto se desprende la preocupación por armonizar las particularidades regionales con el desarrollo general del país. La instalación de la Junta generaba, además, un espacio de negociación y conciliación entre los representantes departamentales que alimentaban distintas expectativas respecto al nuevo instituto que se proyectaba y de éstos con el gobierno central. Como resultado el énfasis pareció desplazarse del modelo profesionalista, al que adhería el movimiento en Salto, hacia la instalación de carreras tecnológicas que estuvieran ligadas a los sectores productivos, y muy especialmente, al agropecuario. Se afianzó una concepción que, privilegiando el vínculo directo entre educación y economía, hacía foco en la formación técnica pero dejaba abierta la posibilidad de instalar carreras tradicionales. Algunos representantes departamentales (claramente el caso de Salto) aspiraban a que la Junta diseñara un instrumento legal que garantizara el estatuto universitario del nuevo centro de educación para así aumentar la oferta educativa a futuro. En esta etapa el gobierno, que buscaba un camino para contrabalancear el peso de la Universidad de la República, también se inclinó por esta opción.

Para García Capurro la Universidad del Norte era el germen de lo que debía ser una «Universidad para el Desarrollo» cuyas características, organización y fines estarían orientados a la formación de profesionales aptos para cubrir las «necesidades del ambiente». Sostenía que el atraso e ineficiencia de la enseñanza universitaria se debía a que no se había incorporado «el concepto de rendimiento, de productividad». En su opinión, la educación debía encararse «con el rigor de un ente industrial» y la enseñanza superior, en particular, debía inclinarse «producir gente que resuelva problemas» alejándose de la concepción «académica y doctoral» que parecía predominar en la Udelar[49]. Las soluciones que el país necesitaba vendrían de aquellos que «son capaces de producir riqueza», afirmaba[50]. Entre los cometidos fundamentales de la enseñanza superior estaba conformar en un lapso breve de tiempo un equipo técnico calificado volcado a los sectores de producción prioritarios para el progreso económico del país. Haciéndose eco de algunos de los principales cuestionamientos de la CIDE, señalaba los altos costos que suponía continuar «formando profesionales en la media docena de facultades tradicionales» que, sumado al tiempo de duración de las carreras, sustraían al estudiante «de la vida y de la producción durante siete, diez o más años.» Proponía

48 Decreto 499/969 en *Registro Nacional de Leyes, Decretos, etc.*, 9 de octubre 1969, 1543-1545.
49 *Tribuna salteña*, 18 de junio de 1969, 8.
50 *BP Color.* Edición Extraordinaria del 90o.Aniversario del Bien Público, 27 de noviembre de 1967, 18.

en cambio dividir las carreras en etapas breves asegurando al joven su incorporación al mercado de trabajo mientras proseguía, si así lo deseaba, estudios superiores. Apuntaba así a una formación intermedia cuya finalidad era la aplicación directa de los conocimientos adquiridos. Un segundo aspecto consistía en crear especializaciones en áreas como ingeniería, química, agronomía y medicina que requerían de «expertos de formación rápida, que a la actualidad deben buscarse en el extranjero». Esta perspectiva hacía énfasis en la enseñanza técnica para el desarrollo de sectores económicos fundamentales para la economía nacional a la vez que estimulaba la inserción laboral temprana de los jóvenes egresados. Para superar el estancamiento, el país necesitaba un incremento de la productividad lo cual se lograba mediante la incorporación de tecnologías modernas junto con los técnicos que supieran manejarlas.

En consonancia con estos propósitos «la Universidad para el desarrollo» adoptaría una «organización abierta» contemplando la participación en su dirección de representantes de las «fuerzas vivas de país» de manera de coordinar la enseñanza con la demanda de idóneos en los distintos sectores. La incorporación de hacendados, industriales y profesionales en su conducción reforzaba su perfil técnico sin abordar los aspectos de creación y difusión del conocimiento en las áreas mencionadas[51]. «El profesional sin trabajo o que emigra, es una consecuencia de la desconexión existente entre el fundo académico, encerrado en su torre de marfil y el mundo real de las fábricas y los negocios», concluía[52].

Esta visión «tecnológa» fue compartida por diferentes actores más o menos cercanos al proyecto. En particular, los representantes locales en la Junta Planificadora se sumaron a la propuesta del Ministro y, con matices, bregaron para que la Universidad del Norte facilitara la «tecnificación profesional» necesaria para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos de la región norte del país[53]. El representante de Paysandú, por ejemplo, destacaba los beneficios de estimular «profesiones intermedias», destinadas a satisfacer «los requerimientos zonales para el desarrollo de la producción rural u otras técnicas»[54]. Se creaba una alternativa educativa para los jóvenes que atenuaría por un lado los efectos de la masificación y la deserción estudiantil en la universidad oficial al mismo tiempo que solucionaba los «graves inconvenientes que apareja el desarraigo del joven de su lugar de formación cosa que contribuye, además, al macrocefalismo del país»[55].

En la misma dirección, el presidente del Movimiento Pro-Universidad del Norte, José Antonio Varela, insistió en la necesidad de acortar las carreras y de aplicar una «irrenunciable severidad y seriedad en el estudio universitario, concurrencia obligatoria y reglamentaria del

---

51 En el país se habían planteado en distintos momentos posiciones en esta dirección tanto al interior de la Universidad como por parte del Poder Ejecutivo. Para mencionar un ejemplo, un criterio similar orientó a los impulsores de la Ley Orgánica de 1908. Esta ley negó el estatuto de Facultad a las recientemente creadas Facultades de Veterinaria y Agronomía y las redujo a escuelas técnicas dirigidas por representantes de las ramas productivas. Ver Markarian, Vania, Jung, María Eugenia y Wschebor, Isabel. *1908. El año inaugural*, (Montevideo: Universidad de la República, 2008) 19-31

52 *Tribuna Salteña*, 26 de junio de 1969

53 *La Mañana Edición del Interior*, 29 de enero de 1970, 11

54 *La Mañana edición del Interior,* 5 de mayo de 1970, 12

55 *La Mañana Edición del Interior*, 2 de julio de 1970, 3

estudiante a clase, animosa disciplina en el esfuerzo», reforzando los aspectos disciplinarios junto a los técnicos.[56] El representante de Tacuarembó reafirmó también el carácter tecnológico que asumiría el nuevo centro de educación, coincidiendo en que debía contribuir a crear las condiciones para «el desenvolvimiento industrial y agropecuario que el país necesita». Sin embargo, cuestionaba la idea de que se alentaran las carreras liberales tal como se promovía en Salto.[57] El delegado del Comité Pro-Universidad del Norte de Artigas, José María Sityá, coincidía con este planteo al manifestar que de ella egresarían «técnicos a nivel profesional, con títulos habilitantes para integrarse a la producción y la industria»[58]. Para Sityá, esta alternativa repercutiría en un mayor rendimiento de las principales ramas de producción nacional. El aumento de la riqueza nacional dependía de la aplicación de técnicas modernas y en consecuencia, agregaba, «no podemos aspirar al progreso en base a idóneos. Necesitamos técnicos, muchos técnicos»[59].

De lo anterior se desprende la existencia de matices y en algunos casos de diferencias en las expectativas que orientaban los reclamos de los representantes departamentales. En particular, el movimiento salteño, fuertemente influenciado por las corporaciones profesionales (principalmente de los abogados y agrónomos), aún cuando incorporó el proyecto tecnológico del ministro, mantuvo su arraigada aspiración de que la Universidad del Norte albergara carreras de tipo clásico. Por su parte *La Mañana,* firme defensor del proyecto, suscribió a esta posición cuestionando que la Universidad del interior se limitara a expedir «títulos reducidos, similares a los de «idóneos en estrechos sectores de actividad profesional». La misma debía otorgar «verdaderos títulos universitarios, que no sólo capaciten para el ejercicio inmediato de una profesión, sino también habilitante para que el egresado se pueda adecuar al ritmo progresivo de la tecnología»[60]. Se remitía así al prestigio de alcanzar un rango equiparable al de la Universidad en Montevideo, que al momento era la que otorgaba los grados académicos y profesionales más altos. Este fenómeno era global, pese a los cambios que se estaban produciendo en los sistemas de educación superior en el mundo y la región las universidades ocupaban «la posición más visible y de mayor influencia», mientras que las nuevas configuraciones institucionales todavía se consideraban de menor categoría, «situadas en todo caso en los niveles inferiores de una jerarquía cuya cúspide era ocupada por la Universidad»[61].

La discusión en torno a la localización de las sedes se convirtió en otro motivo de tensiones expresando rivalidades o sentimientos localistas largamente arraigados. Para resolver la cuestión se manejaron diferentes opciones, entre ellas la posibilidad de crear un Consejo Central Universitario con sede en Salto que coordinara diferentes escuelas técnicas localizadas en las capitales departamentales donde se priorizara la enseñanza sobre las producciones principales de esas regiones. En la distribución, por ejemplo, Salto tendría una escuela de citricultura, lechería y cueros, mientras en Paysandú se establecería Agronomía y Tacuarembó

[56] *Tribuna Salteña*, 10 de abril de 1970, 3.
[57] *La Mañana Edición del Interior,* 19 de marzo de 1970, p. 6.
[58] *La Mañana Edición del Interior,* 23 de abril de 1970, p. 10.
[59] *La Mañana Edición del Interior,* 23 de abril de 1970, 10
[60] Ver *La Mañana Edición del Interior,* 13 de mayo de 1971, p.3
[61] J.J. Brunner. *Educación Superior en América Latina*, 17

se especializaría en minería[62]. Frente a los resquemores recíprocos el diario *La Mañana* en su edición del interior convocaba a dejar de lado «las aspiraciones localistas» recordando que el «verdadero enemigo era la Universidad de Montevideo»[63].

La propuesta del Poder Ejecutivo, y de los representantes del Movimiento pro-Universidad del Norte, interpelaba a la Universidad de la República que, por ese entonces, intentaba concretar un proceso de reformas que colocara a la investigación científica en el centro de su actividad y profundizara su inserción social. De acuerdo con el plan presentado al Consejo Directivo Central en 1967 por el Rector Oscar J. Maggiolo, las funciones de la universidad no podían restringirse a formar técnicos «capaces de asimilar y aplicar los conocimientos existentes» ni profesionales en sentido clásico, en cambio debía orientarse a la preparación de investigadores de alto nivel, al fomento de la investigación en conexión con la enseñanza y a las funciones de extensión[64]. No es de extrañar por tanto que las propuestas del Movimiento provocaran un inmediato rechazo de la dirigencia universitaria. El rector Maggiolo, durante el acto de inauguración de la Casa de la Universidad en Salto en 1970, cuestionó duramente la «Universidad de carreras cortas» ya que con «técnicos de nivel medio nunca alcanzaremos la autonomía cultural que nuestra dependencia política y económica exige»[65]. De hecho, el Plan Maggiolo establecía claramente los niveles de enseñanza que debía impartir la Universidad, priorizando el correspondiente a licenciatura o maestría y el nivel de doctorado[66].

En marzo de 1970, tras el escándalo provocado por la fuga de presas del Movimiento Nacional de Liberación Nacional (MLN) de la Cárcel de Mujeres, el Ministro García Capurro debió renunciar. Este acontecimiento significó un duro revés para los promotores de la universidad en el interior del país. Su sustituto, Carlos María Fleitas, representante del sector colorado «Unidad y Reforma» liderado por el Dr. Jorge Batlle, modificó el rumbo que el Poder Ejecutivo había seguido respecto a este asunto: retomó el diálogo con las autoridades universitarias al mismo tiempo que el trámite de la Universidad del Norte, que se encontraba en la órbita del Ministerio de Cultura, quedaba paralizado.

Esta circunstancia provocó severos cuestionamientos por parte de los partidarios de la Universidad del Norte y de la prensa conservadora. El diario nacionalista *El País* acusó al nuevo Ministro de acercarse a «la Universidad monopolista existente» mientras se mantenía en silencio sobre si cumpliría con el compromiso, «contraído por el gobierno y por el presidente con la juventud del interior […] como consta en un decreto».[67] Con el correr de los días, sin embargo, iba quedando claro que el proyecto era «enterrado» dejando como saldo una «movilización frustrada», «promesas incumplidas» y «ciudadanos desairados».[68] *Tribuna*

---

62 *Tribuna salteña,* 11 de setiembre de 1969, 1 *«El movimiento Pro-Universidad del Norte dialogó con alumnos del Liceo Zona Este»*

63 *La Mañana Edición del Interior,* 1º. De octubre de 1970, 3

64 *Plan de Reestructuración de la Universidad de Oscar Maggiolo*. (Montevideo. Universidad de la República, 1986)

65 «Inauguración de la casa de la Universidad en Salto» 18 de julio de 1970. Archivo Maggiolo, caja 11, Carpeta 214.

66 Ver *Plan de reestructuración de la Universidad,* 13-15.

67 Tomado de *El País*. En: *Tribuna Salteña,* 23 de abril 1970, 3

68 *El País*, 29 de mayo 1970, 3

Salteña, por su parte, realizaba un encendido llamado a redoblar la lucha «por la creación de la Universidad del Norte, para contrarrestar en parte la podredumbre maloliente del sur»[69] Mientras esto ocurría el presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, en una visita a Tacuarembó reafirmaba su apoyo al movimiento dejando entrever contradicciones en el equipo gobernante[70]. En sus declaraciones sostuvo que las «nuevas expresiones» que emergían la zona norte del país debían ajustarse «a las necesidades de una enseñanza moderna, con otro enfoque, con otra orientación» e inserta en los planes de desarrollo del gobierno. Esa enseñanza moderna era la que proporcionaría los técnicos y especialistas capaces de dinamizar todos los sectores de la economía y sería impulsada «dentro de la ley y la constitución, pacíficamente»[71].

La Junta Planificadora, por su parte, rápidamente se movilizó y promovió contactos con el Ministro encaminadas a destrabar la situación. En los meses siguientes se sucedieron varias reuniones, en Artigas primero y en Tacuarembó después, donde Fleitas fundamentó sus razones para descartar la creación de una universidad en el interior. Propuso, en cambio, la instalación de Institutos Tecnológicos Superiores a nivel regional que tendrían como cometido establecer la coordinación general con todos los organismos de tecnología estatal y privado en la zona norte.[72] En estas reuniones participaron también las «fuerzas vivas locales», estudiantes, diputados y representantes del gobierno departamental.[73] El Dr. José Antonio Varela, presidente de la Junta Planificadora, paralelamente mantuvo conversaciones con el Dr. Jorge Batlle de «Unidad y Reforma» para conseguir su apoyo, quien por su parte, respaldó la propuesta de su ministro de crear un instituto tecnológico.[74] En este asunto, este sector colorado marcó distancia respecto al gobierno y a los sectores que lo apoyaban. Aún cuando existía coincidencia acerca de la «ineficiencia, la inoperancia y la vetustez de los sistemas pedagógicos, de los programas y de la administración de la enseñanza», en general y universitaria en particular, las soluciones propuestas diferían. Desde las páginas del diario *Acción* se cuestionaba duramente el excesivo academicismo de la formación que ofrecía la UDELAR así como el excesivo énfasis en las profesiones liberales[75]. Pero no consideraba oportuno la instalación de otra universidad. Para aminorar estas diferencias el senador colorado Fa Robaina señalaba que en esencia la propuesta era coincidente y que se trataba de un problema meramente semántico. En última instancia había acuerdo en que era preciso propiciar el desarrollo técnico de las zonas diversas del país, según necesidades sociales, industriales y demográficas.[76]

En los años previos al golpe de Estado, la discusión sobre estos asuntos fueron desplazados de la agenda política nacional. Aunque la movilización impulsada por el

[69] *Tribuna Salteña*, 28 de agosto de 1970, 3

[70] Estas contradicciones quedaron de manifiesto nuevamente en setiembre de 1971 cuando un decreto del Poder Ejecutivo ampliaba la integración de la Junta Planificadora en vistas de crear la Universidad en el Interior. Ver Decreto 586/971 EN *Registro Nacional de Leyes y Decretos.,* 15 de setiembre de 1971, 590-1

[71] *La Mañana Edición del Interior,* 16 de julio de 1970, p.4

[72] *El País*, 12 de julio de 1970, 5

[73] *Tribuna Salteña*, 30 de julio de 1970, p.3

[74] *Tribuna Salteña*, 23 julio de 1970, p.3

[75] *Acción*, 16 de julio 1970, 4. Universidad del Norte. Falsa oposición.

[76] *Acción,* 22 de julio de 1970, p.4

Movimiento pro-Universidad del Norte se mantuvo incesante no alcanzó las adhesiones políticas necesarias. Otras preocupaciones, vinculadas a las duras circunstancias que atravesaba el país, concentraron la atención de los partidos políticos y del elenco gobernante. El período «pre-dictadura» presenció la agudización del deterioro económico y social, de la crisis política y con ella los desbordes autoritarios del gobierno. En este marco, el tono del movimiento se fue tornando más confrontativo conforme se consolidaba el apoyo al proyecto de Universidad del Norte de los grupos de la ultraderecha que intensificaron sus acciones por esos años. Con el advenimiento del golpe de Estado, y posteriormente de la intervención de la Universidad, las discusiones así como los intentos de crear otra universidad quedaron en un compás de espera. Unos meses después, representantes del Movimiento reanudaron las gestiones ante el Ministro de Cultura, Edmundo Narancio, con el propósito de concretar la ansiada universidad en Salto. Sin embargo, se acordó re-abrir la Casa de la Universidad que funcionaba en la ciudad desde 1970 donde se instalaron, en 1975, cursos universitarios de arquitectura, ingeniería, veterinaria y agronomía. El Movimiento continuó durante esos años al frente de las actividades que se desarrollaron en la Casa así como de los cursos que se dictaban. En agosto de 1984, cuando ya se vislumbraba claramente el fin del régimen, las autoridades de facto decretaron el cese de la intervención y un día después emitieron el decreto que habilitaba la creación de universidades privadas. Como consecuencia comenzó a funcionar la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL) que abrió el camino para la creación del sistema universitario privado en el país y que años más tarde instaló una sede en la ciudad de Salto. Tras la reinstalación de las autoridades legítimas de la Universidad de la República el Movimiento se transformó en Fundación Universitaria Regional Norte con el cometido de contribuir al desarrollo de las actividades universitarias en Salto. La Universidad del Norte no fue creada y en cambio, bajo la órbita de la Universidad de la República, se fundó la Regional Norte con sede en Salto cuyo estatuto fue aprobado en 1987 y que funciona hasta hoy.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo se ha intentado demostrar cómo diversos grupos alineados a la derecha política en Uruguay, en un contexto de extrema radicalización política y disputa por el control de la educación, reconvirtieron una demanda originalmente de carácter local, como lo era crear una universidad en el interior, en una reivindicación propia al tiempo que se incorporaron a los debates sobre la modernización universitaria para el desarrollo nacional. Preocupados por el sesgo ideológico de la Universidad de la República, y su incorporación a un movimiento que requirió cambios sociales más o menos radicales, este proyecto ofreció la posibilidad de establecer un formato universitario alternativo y opuesto en lo académico y en lo político. El apoyo que la solicitud recibió de diversos sectores políticos, y en particular del gobierno central, posibilitó que el tema trascendiera los estrechos marcos locales y se incorporara a la agenda política nacional en un contexto latinoamericano de debates sobre el rol de las universidades en los procesos de modernización económica y social. Interesa destacar que las disputas locales en torno a las funciones de la universidad no fueron ajenas a la situación de los sistemas universitarios en los países latinoamericanos y en el mundo que,

desde mediados de los cincuenta, asistieron a un incremento exponencial del número de estudiantes matriculados y a una inédita diversificación y diferenciación institucional. En este sentido, se procura visualizar la articulación de la situación del sistema educativo uruguayo y los intentos para modernizarlo con otros casos en América Latina. Queda por ahondar más en las posibles influencias recíprocas, y en cuánto de estos procesos locales se vieron influenciados por la circulación de ideas, personas y agendas fuera de las fronteras nacionales.

Aunque pueda parecer obvio, cabe destacar que tras las discusiones acerca del futuro de la educación superior se disputaban distintos modelos o proyectos de país. La preocupación por la reforma educativa iba de la mano con el tipo de desarrollo que, en particular, estos actores políticos concebían. En consonancia con ello, y bajo la influencia del desarrollismo, la discusión involucró asuntos como la relación entre país agrario e industrial, el impulso al sector agropecuario, la función del estado en la dirección del desarrollo económico, el papel de la iniciativa privada en la economía nacional, el planeamiento económico y el estancamiento productivo. A lo largo de este trabajo, se concluye entonces que las posiciones sustentadas por los grupos derechistas se basaron en un fuerte cuestionamiento al perfil academicista y doctoral de la Universidad de la República ponderando, en cambio, una formación que privilegiara la capacitación en disciplinas técnicas y tecnológicas de aplicación inmediata a los sectores productivos considerados fundamentales para el progreso económico y social del país. Sin embargo, se evidencia también que no se manifestó una postura homogénea sobre estos asuntos; es posible detectar matices y apuestas diversas en función de distintos intereses corporativos, locales y posiciones ideológicas.

El régimen autoritario instalado en junio de 1973 intervino la Universidad y postergó el proyecto de crear la Universidad del Norte. En cambio, tras las gestiones del Movimiento pro Universidad del Norte, a partir de 1975 se instalaron cursos universitarios de las facultades de Agronomía, Veterinaria, Ingeniería y Arquitectura. La intervención de la casa mayor de estudios parece haber sido suficiente para algunos de los grupos que habían apoyado el proyecto de crear la universidad en el interior. Sin embargo, la demanda de los actores locales por expandir la cobertura universitaria se mantuvo a través de esos años. Tras la apertura democrática, la Universidad de la República incrementó en forma paulatina, y a veces de manera errática, sus actividades en el interior del país. Pero, a partir del 2004 comenzó a desarrollar un inédito esfuerzo para extender su cobertura a todo el territorio nacional, atendiendo en muchos casos reclamos locales y sectoriales de diferentes procedencias. Este camino se profundizó a partir de 2007 cuando la conducción universitaria adoptó una serie de decisiones sobre cómo abordar el trabajo en el interior del país en el marco de un proceso de reforma general de la institución y en acuerdo con las autoridades nacionales y departamentales. A partir de ese momento se ha ido incrementando la presencia universitaria en las distintas localidades: año a año se abren nuevas sedes a la vez que crece exponencialmente la oferta educativa terciaria. Paralelamente, debemos señalar que la creación de una Universidad Tecnológica y su radicación en el interior ha sido un tema prioritario en la agenda del gobierno de izquierda encabezado por José Mujica. En

consecuencia, a fines del 2012 el Parlamento nacional aprobó la ley de creación de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) que comenzará a funcionar a partir del 2014.